

DESIGUALDAD Y JUVENTUD EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

RAFAEL CORDERA CAMPOS*

ALFREDO POPOCA GARCÍA**

* Hasta noviembre de 2010, fecha de su fallecimiento, fue Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y profesor de la Facultad de Economía, UNAM.

** Asesor del Secretario General de la UDUAL y profesor de la Facultad de Economía, UNAM.

Agradecemos al maestro

Javier Cabrera Adame, de la Facultad de Economía de la UNAM, habernos permitido publicar este artículo.

72

El reciente informe sobre la situación actual del desarrollo humano en América Latina y el Caribe (ALC) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, confirma que esta región sigue siendo la más desigual del mundo.¹ En el presente trabajo se analizarán las consecuencias de esa situación socioeconómica sobre la juventud mexicana; lo cual es muy importante porque, desafortunadamente “la desigualdad se transmite de una generación a otra debido a que su intensidad y persistencia se combinan con una baja movilidad social”.² Partiendo de este marco general latinoamericano de referencia, veamos la situación en que se encuentra la juventud mexicana, y el futuro que le espera.

En 1996, los expertos en demografía señalaban que en México había aproximadamente 26 millones de habitantes con edades entre los 12 y 24 años. También advertían que esos millones de jóvenes representaban -en ese año- el 30% del total nacional, hoy son alrededor de 33 millones.

Quince años después de delineada la ruta demográfica que nuestro país iría recorriendo, no parece que el Estado y la sociedad se hayan percatado de lo trascendente que para la nación representaba el llamado “bono demográfico”; es decir, la oportunidad única de establecer una relación ventajosa entre la población productiva y la

no productiva. La oportunidad había que aprovecharla; estaba en la estructura de edades, donde los jóvenes eran los más numerosos.

Sin embargo, esos millones de personas nunca fueron vistos como el terreno más fértil, el ámbito más propicio para invertir y hacer de ese núcleo de población el punto de apoyo para desarrollar al país en un futuro. Nunca se pensó que entre ellos se encontraba la materia prima para la formación de capital humano, indispensable y estratégico en la sociedad del conocimiento, donde los saberes, la tecnología y la innovación se revelan como los resortes de un desarrollo social integral moderno.

¿Cuántos miles de ingenieros, médicos, científicos, agrónomos, biólogos, economistas, historiadores, literatos, creadores del arte y la cultura, etcétera, dejaron de formarse? A cambio de ello continuaron las crisis. La pobreza, la marginalidad, la insalubridad, la desocupación y otros males -al acentuarse- extendieron sus efectos sobre la población, en particular entre los más vulnerables, incluida la juventud mexicana.

Si es cierto, como algunos suponen, que ya se ha perdido la oportunidad del "bono demográfico", valdría la pena preguntarse si todavía tiene caso ocuparse de la juventud y de su posible rol en los trabajos para sacar a México de su atraso.

1 La descapitalización de recursos humanos: El pasivo demográfico

Los años ochenta del siglo XX son el punto de referencia del abandono de las políticas sociales. Es precisamente durante la llamada década perdida que el gasto público tuvo un drástico cambio de destino. Los recortes presupuestales a la salud, la educación, la vivienda y otros rubros asociados al bienestar social, resultaron en la depauperación de la población, la profundización de las desigualdades y el crecimiento del desempleo y la marginalidad.

Como la formación del capital humano no ha sido una prioridad del Estado mexicano, los jóvenes

que nacieron en el decenio anterior comenzaron a experimentar la larga pesadilla -interminable todavía- de las crisis, a la que se fueron sumando las generaciones siguientes. De hecho, la filosofía que guió en esos años a la política económica se extendió como dogma de fe a los siguientes sexenios gubernamentales, sin que, para los jóvenes, existieran las oportunidades suficientes en la educación, el empleo, la vivienda y los servicios de salud, que les permitieran, a la vez, alcanzar niveles de bienestar aceptables y contribuir al desarrollo nacional.

La poca importancia que durante décadas los sucesivos gobiernos y el resto de las instituciones nacionales le han otorgado al papel estratégico de los jóvenes explica que se sepa muy poco de ellos. Este grupo, distinguido por su heterogeneidad -por razones geográficas, origen social y económico, género y otras variables- no hace mucho tiempo que es motivo de estudio y reflexión. Tampoco se puede decir que haya una total ignorancia sobre las condiciones de este estrato de la población. En particular, son de reconocerse las investigaciones realizadas bajo los auspicios del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), cuyos resultados han ido mostrando aspectos sobre el mundo juvenil que antes se desconocían.

En todo caso, el precio de las consecuencias que han dejado las políticas gubernamentales -o mejor dicho, la ausencia de ellas- son la segregación, discriminación, marginación y el desencanto por el país y sus instituciones: negro presente y futuro aún peor.

Una de estas secuelas más preocupantes es el desempleo que se ha acumulado a lo largo de varias décadas. En efecto, desde hace tiempo la economía tenía que haber creado anualmente más de un millón de nuevas plazas de trabajo que, en promedio, demandan los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Por desgracia esto no ha sucedido así. Por eso, históricamente, la tasa de desocupación entre los jóvenes ha sido mayor a la del promedio nacional, aunque la situación de las mujeres es aún más desventajosa que la de los varones.

En 2004, la tasa de desempleo para el grupo de edades entre los 15 y 24 años fue de 5.4% y actualmente es del

6.3%. A la falta de apertura de nuevos empleos habrá que sumar los rezagos que año tras año se acumulan, para tener una imagen más aproximada de lo que los jóvenes, en este rubro, padecen.

Por otro lado, en el ámbito de los ocupados el panorama se acerca más a lo sombrío que a lo alenta-

dor. Los datos que arrojó el Censo General del año 2000 dan cuenta de las limitaciones a las que se enfrentan los jóvenes para cumplir con sus necesidades básicas y salir adelante: 16.5% de los jóvenes de entre 15 y 29 años no recibe remuneración salarial, de ellos, 21% gana un salario mínimo o menos y el 72% recibe tres o menos salarios mínimos. Hablamos de promedios nacionales.

Adicionalmente, habría que referirse a los complementos al salario y otras prestaciones que, estando prescritas por las leyes laborales, no se encuentran al alcance de esta parte de la población. Sólo por ejemplificar pueden mencionarse los siguientes datos: el 70% de la población juvenil carece de un contrato laboral. Peor aún, sólo 16% tiene acceso a los servicios de salud y un porcentaje menor es beneficiario de los escasos préstamos, seguros médicos y créditos para vivienda.

Lo anterior explica por qué la economía informal sigue siendo el atajo de muchos jóvenes. Sin ingresos seguros, con trabajos aleatorios y sin seguridad social, el joven encuentra allí una manera de ir sobreviviendo; en ocasiones dedicándose a actividades ilícitas a las cuales puede dedicarse por completo o atraído por la obtención de dinero "fácil y rápido".

Por otro lado, es importante considerar que las presiones de la demanda de empleo serían mayores si no fuera por la vecindad con Estados Unidos, que constituye un polo de atracción para quienes en México no encuentran ocupación o para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida mediante mayores ingresos. Ésta ha



sido una constante durante muchas décadas, pero en la actualidad el número de migrantes jóvenes ha crecido más que en otros rangos de edad. Existen estimaciones de que el número de quienes han cruzado la frontera norte asciende a las 400 mil personas, de las cuales el 72% son menores de 29 años.

Entonces, son los jóvenes los que nutren la mayoría de estas corrientes migratorias, muchos de ellos con grados avanzados de escolaridad; es decir, ya no es sólo el campesino tradicional -a veces analfabeta- el que abandona el país, sino ahora es el habitante urbano con algunos años de educación. Incluso existe la tendencia de que cada vez sea mayor el número de jóvenes con estudios superiores que emigra en busca de mejores condiciones económicas y de superación, en tanto los países desarrollados han establecido políticas específicas para atraer a los hombres y mujeres mejor calificados, ofreciendo oportunidades que no existen en los países periféricos.

Así, el mundo globalizado y la sociedad del conocimiento han internacionalizado el mercado de los talentos. Por eso estas políticas de atracción deben ser vistas no como un fenómeno transitorio, sino como una práctica permanente gracias a la cual México está perdiendo capital humano. Simplemente téngase en cuenta que de los mayores de 15 años que viven en Estados Unidos -pero que nacieron en México- 39% tiene estudios de bachillerato o superiores. Aún más grave: los residentes con estudios profesionales y de posgrado suman 470 mil, de los cuales el 70% se encuentra entre los 20 y 24 años. El problema representa tal gravedad que países periféricos -como México- pierden entre 10% y 30% de quienes tienen estudios de nivel superior; es decir, pérdida de capital humano.

Algunos datos adicionales son complementarios a este tema. El mercado mexicano de trabajo ha creado situaciones un tanto sorprendidas. De entre el mundo de los jóvenes desocupados, el 42% cuenta con estudios subprofesionales, educación media superior o superior, en tanto que entre los ocupados, solamente el 29% alcanza esos niveles de educación. La pregunta es: ¿el aparato productivo, la economía mexicana, no requiere jóvenes con niveles altos de escolaridad? ¿Acaso una formación educativa inferior puede suplir a una superior?

Esta somera descripción de las condiciones del empleo entre los jóvenes, da una idea aproximada del déficit que arroja la política gubernamental en torno al tema de la atención a este sector. Pero no es el único indicador, pues por muchas razones, el empleo se encuentra muy asociado a otro tópico, también crucial para el país y sus jóvenes: la educación.

De acuerdo con el estudio del PNUD, los datos para México señalaban que en 2008 la educación básica, que abarca la población entre 6 y 12 años había alcanzado una matriculación promedio del 98%, nivel superior a la media de la región latinoamericana que era del 96%,³; sin embargo, ese alto porcentaje no se mantenía para los rangos de edades entre 13-17 años y 18-23 años, donde la matriculación decae a 76% y 33.2%, respectivamente, encontrándose ambos índices por debajo de los promedios de ALC que eran 82% y 36%. Esto significa que en México, aunque se ha logrado alcanzar un alto índice de matriculación en la etapa básica de la educación, sin embargo, el mismo no se mantiene en las etapas posteriores, tendiendo a decrecer en la media y, sobre todo, en la superior, con lo que el ciclo educativo no logra concluirse satisfactoriamente. De esta manera, no obstante que en México el primer impulso en la inversión de capital humano ha sido importante, el mismo no se mantiene en las siguientes fases que son igual o más importante que la primera, en virtud de que son aquellas en las cuales se adquieren los conocimientos, habilidades y destrezas para enfrentarse al mercado de trabajo, es decir la que les permitiría obtener un nivel de ingreso adecuado para la satisfacción de sus necesidades.

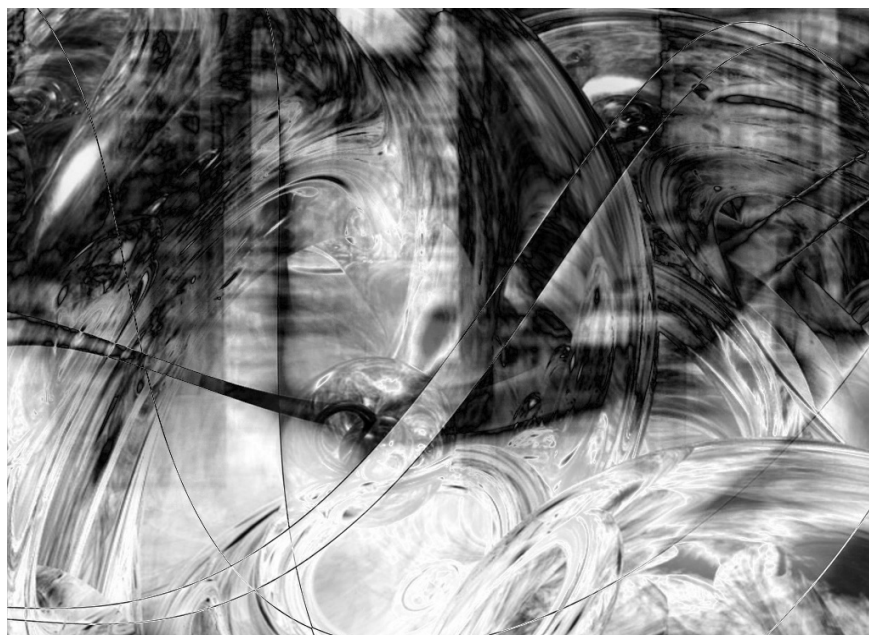
Las celebraciones de la Independencia (Bicentenario) y la Revolución Mexicana (Centenario), se producen teniendo como fondo una tasa de analfabetismo del 3.6%, que afecta a la población entre los 12 y los 29 años. El porcentaje de jóvenes cuyo nivel educativo no rebasa la primaria es del 36%, además, existen estimaciones que dan cuenta de que 35 millones de personas mayores de 15 años no alcanzaron a completar los nueve años de la educación básica y 44 millones no culminaron la educación media superior. En este sentido, aunque el Estado mexicano comprende que la inversión temprana en capital humano es clave para el desarrollo, pues en términos de bienestar y desarrollo humano los primeros años de la vida de las personas resultan cruciales,⁴ sin embargo, no ha logrado entender que ese primer impulso educativo es insuficiente para lograr la capacitación integral que le permitiría a la población juvenil y, por consiguiente, al país beneficiarse realmente.

Lo que muestran las cifras es que el sistema educativo -o mejor dicho, la forma como está organizada la sociedad mexicana- no ha sido capaz de retener a los educandos en su recorrido dentro de las etapas de formación. Millones de niños y jóvenes abandonan las aulas motivados por muchos factores. De acuerdo con varias fuentes de información, entre los 12 y los 18 años, es decir, en las edades de la secundaria y el bachillerato, se encuentra el 80% de quienes dejan la escuela. Al respecto, conviene tomar en cuenta la advertencia del PNUD en el sentido de que en América Latina y el Caribe "la interrupción de la escolaridad se debe a las restricciones socioeconómicas de los padres y no a cuestiones ligadas con las habilidades de los jóvenes."⁵

En lo que corresponde al porcentaje de jóvenes que sí asisten a la escuela, de acuerdo a cifras oficiales, entre los 15 y 19 años de edad sólo asiste el 45%; de los que se ubican entre 20 y 24 años, son poco menos de 20%, y de los que tienen entre 25 y 29 años, sólo el 5% se encuentra estudiando.

En 1993, cuando la educación secundaria se hizo obligatoria y con ello la educación básica o mínima se amplió a nueve años, se buscaba dotar a los estudiantes

de una formación general, habilitarlos en competencias básicas que les permitieran desenvolverse en un mundo complejo y cambiante e incorporarse a la vida social como agentes activos en las labores de la construcción de la democracia.



la media nacional de respuestas correctas de los aspirantes a ingresar a la educación media superior fue de 47.5%, es decir: el grupo de 500 mil egresados de la secundaria contestó correctamente sólo 61 de las 128 preguntas.

Quince años más tarde, no parece que estos objetivos se hayan cumplido. Cerca de millón y medio de jóvenes entre los 12 y 15 años no ha cursado -o ha abandonado- la escuela antes de cumplir los nueve años de educación obligatoria. Casi la mitad de ellos no continuaron al terminar la educación primaria.

No es necesario agregar más cifras en relación con el tema de la deserción escolar, lo que sí es conveniente aceptar que existe y que debe ser considerada como un mal estructural, al igual que muchos otros que gravitan sobre la educación y los jóvenes.

Por separado habrá que considerar lo relativo a la reprobación y la eficiencia terminal. Aquí tampoco existen buenas cuentas. Uno de cada cuatro estudiantes inscritos en la escuela secundaria no termina su ciclo en el tiempo establecido, entre otras cosas, por la acumulación de asignaturas reprobadas, que a la larga se traduce en la reprobación del grado y/o la deserción.

Además de estos agudos problemas, existe otro que es crucial: el asunto de la calidad de la educación. Las pruebas nacionales aplicadas en el 2003 indicaron que una cuarta parte de los estudiantes del tercer grado de secundaria presentaron deficiencias en su capacidad de comprender una lectura y la mitad de ellos estaba muy lejos de desempeñarse bien en el área de razonamiento matemático. Por otra parte, el CENEVAL reportó que en 2001

Tan catastrófica situación fue corroborada por el Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante (PISA), cuyos resultados indicaron que de los estudiantes mexicanos de 15 años de edad, únicamente el 28% supo completar tareas poco complejas de lectura, tales como localizar una pieza de información, identificar el tema principal de un texto, o establecer una conexión simple con el saber cotidiano. Además, el 16% tuvo serias dificultades para usar la lectura como herramienta de aprendizaje. Obviamente estos problemas se agravan en condiciones de pobreza y/o entre la población indígena, aún más, si se trata de mujeres.

Vale la pena insistir en el hecho de que la educación se encuentre postrada desde hace tantos años ha significado que el país ha estado desperdiciado recursos humanos que le son vitales para el desarrollo y que -por eso también- miles, millones de seres humanos han perdido la oportunidad de acceder a una calidad de vida aceptable que la sociedad se ha negado a otorgarles. Parece entonces que será necesario hacer mucho al respecto. Sin duda, la educación requiere de mayores recursos, pero las soluciones no se alcanzan sólo con ellos. Como ya se dijo antes, la educación es un problema estructural. De cualquier forma, en materia de recursos, éstos no pueden seguir siendo usados como hasta ahora. Se trata de incrementar la productividad de la inversión, de acabar

con las cuantiosas filtraciones a que dan lugar la excesiva burocracia, la corrupción y el nudo de intereses gremiales y corporativos que durante décadas han constituido un pesado fardo para el desarrollo de la educación.

Tan importante como lo anterior es realizar un cambio en la educación que responda a las necesidades que impone un mundo globalizado y una emergente sociedad del conocimiento. Serán indispensables nuevos paradigmas, nuevos valores y otras competencias, una renovada pedagogía y métodos didácticos modernos.

En el ámbito de la educación superior se puede decir que durante décadas -a partir de 1980- el crecimiento del gasto público federal, medido en valores constantes, no fue consistente con el aumento de las necesidades del subsistema, entre otras cosas con el crecimiento de la demanda de ingreso de los estudiantes. Entre 1980 y 2001 el gasto real por estudiante se redujo de 22,750 a 17,480 pesos, reducción que a todas luces fue atentatoria contra la calidad de la educación.

Además de los subsidios insuficientes, la educación superior tiene que contender con los males que se van acumulando desde los niveles precedentes. Los registros muestran que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, 16 concluyen la educación media superior y únicamente 6 completan el ciclo de la educación superior. Por eso no resulta extraño que en México el índice de escolaridad en el nivel terciario se encuentre por debajo no ya del que tienen los países avanzados, sino también de países de la región, como El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Esto se ha visto agravado recientemente por el hecho de que en algunos países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia y México, "la crisis tuvo un impacto negativo en las posibilidades de los jóvenes de completar la educación media y de ingresar a la educación superior, . . . [llegando incluso a que] muchas familias en situación de pobreza se vieran obligadas a interrumpir la escolaridad de los niños como estrategia para enfrentar la grave situación económica".⁶

En ese sentido, existe una evidente urgencia de ampliar la cobertura y la calidad de la educación superior, pues el atraso del país no podrá ser superado si se man-

tienen indicadores tales como que existan 214 científicos e ingenieros por cada millón de habitantes. En contraste, Costa Rica tiene 582, Argentina 660, Canadá 2719 y Estados Unidos de Norteamérica 3,673.

Frente a este panorama algo puede y debe hacerse. No es una buena decisión abandonar la escuela para incursionar en un mercado laboral raquítico e incierto, sobre todo a edades tan tempranas como son las de entre los 12 y 18 años. Entonces el esfuerzo debe dirigirse a crear las condiciones suficientes para retener a los estudiantes dentro del sistema educativo, para que puedan completar un mayor número de años de escolaridad, al menos por encima del promedio actual.

En el nivel superior se requieren cambios que permitan a la calidad de la educación salir airoso de las evaluaciones internacionales y ponerse en sintonía con las ya no tan nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Una educación para la formación de ciudadanos promotores de la democracia, solidarios, tolerantes, respetuosos de la pluralidad y la diversidad y sujetos activos en el cuidado del medio ambiente.

En cuanto a la salud de los jóvenes, diversos organismos internacionales han señalado su alto grado de vulnerabilidad. El creciente número de jóvenes adictos a las drogas; el incremento de la delincuencia juvenil -la cantidad de jóvenes dentro de las cárceles apoya esta afirmación-; la expansión de la incidencia de contagios del Sida y otra enfermedades de transmisión sexual; el elevado número de embarazos no deseados entre adolescentes y jóvenes menores de 20 años⁷; los miles de casos de abortos en condiciones de insalubridad; las cantidades crecientes de muertes violentas de jóvenes, y la violencia intrafamiliar, conforman un entramado de áreas relacionadas con la salud y la seguridad juveniles que ameritan políticas públicas más decididas, más constantes y más extensas que las que hoy existen.

En relación con la cobertura, los datos estadísticos muestran que sólo el 39% del grupo de entre 15 y 29 años a nivel nacional tiene algún tipo de cobertura, porcentaje que aumenta para el caso de los jóvenes del Distrito Federal en donde equivale al 46%.

Estamos, pues, ante un desastre social previamente anunciado. En el país, desde que dejó de ser significativamente de niños y se anunció que por un buen tiempo lo sería de jóvenes, no ha habido una política pública integral para ellos. El Estado y los gobiernos no han podido -y algunos no han querido- hacer gran cosa, o lo que han hecho hasta ahora es verdaderamente limitado e insuficiente. Por ello no es exagerado afirmar que las élites que han gobernado México no tienen la atención ni el compromiso que deberían tener. Si, como hemos visto, nos encontramos ante un déficit en prácticamente cualquier tema que atañe a la juventud de nuestro país. En pocas palabras: el Estado y la sociedad nos hemos quedado cortos ante las necesidades evidentes de la juventud. Y esto ha sido por décadas. En materias como la de juventud y educación, México está reprobado. En el de la relación de aquélla con el empleo, también. En la construcción de ciudadanía, no se ha hecho gran cosa. No es fácil saber si es tarde o hay todavía tiempo para actuar en estos terrenos. Pero lo que no se puede ignorar es que el reclamo de los jóvenes entre 14 y 29 años puede presentarse, de manera parcial o generalizada, en cualquier momento.

78

2 Juventud y ciudadanía

La vida de las generaciones posteriores al Desarrollo Estabilizador -el llamado "milagro mexicano"- y al movimiento social de 1968, se ha deslizado sobre dos procesos sociales fundamentales, cada uno de los cuales parece haber cambiado de dirección.

La juventud que protagonizó el 68, junto con el resto de la clase media, fue la beneficiaria de los años del auge económico, pero también conocedora del comportamiento de un régimen autoritario y antidemocrático. En sentido contrario, quienes nacieron después de esa fecha, son jóvenes que han padecido los efectos de un desarrollo económico muy pobre, con una larga cadena de crisis, que los ha depauperado y colocado en la marginación y la discriminación. Sin embargo, también a ellos les ha

tocado ver nacer y vivir una democracia, que, a pesar de todo, no ha ajustado cuentas con el viejo régimen. Estos jóvenes han sido testigos y víctimas de la sobrevivencia de la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y otros lastres que socavan el funcionamiento de las instituciones. Oyen hablar de un estado de derecho, pero saben que se les miente. Escuchan a diario promesas, pero su experiencia les dice que su condición no ha cambiado. En breve: la economía no les ha dado lo que necesitan, ni la democracia -la política- les ha dado lo que promete.

Estos procesos han moldeado el pensamiento y las conductas de la juventud actual. A ella le ha correspondido ser la víctima principal del agravamiento de las desigualdades, la ausencia de oportunidades, la exclusión e intensificación de la pobreza. Hoy se encuentran minadas las expectativas, y de manera lenta pero persistente se han debilitado los vínculos sociales y el interés por los asuntos públicos.⁸



No es nada extraño que a los ojos de los jóvenes la política y quienes la practican profesionalmente, los políticos, hayan caído en descrédito y que, por esa razón, exista el mito extendido de que son apáticos y se niegan a participar. Sin embargo, eso es sólo apariencia, en realidad los jóvenes han encontrado sus propias formas de agrupamiento y han descubierto en los organismos de la sociedad civil ámbitos en los cuales pueden involucrarse. Por supuesto, también hay una parte de estos jóvenes que se ha decidido a militar en las organizaciones propiamente políticas, tales como los partidos e incluso en organizaciones contestatarias, como sucede con ciertos agrupamientos estudiantiles.

Quizá las cifras no lo reflejen, pero lo cierto es que los jóvenes, sobre todo en la capital, son sujetos activos de la participación ciudadana. Les preocupa lo inmediato, lo cotidiano, lo específico, lo que afecta al barrio, la colonia, a la comunidad con la que se identifican e incluso -y no con menor intensidad- lo relativo a sus afectividades.⁹

De acuerdo con una encuesta del IMJ, el 80% de los jóvenes interrogados sostiene que no ha participado en ninguna manifestación, marcha o acto público y el 75% manifiesta que no participaría en ninguna de las actividades de los partidos políticos, sin embargo el 88% está dispuesto a movilizarse a favor de la paz y los derechos humanos.¹⁰ Es decir, la juventud actual está interesada en participar en actividades que están vinculadas a sus preocupaciones cercanas y a su existencia cotidiana.

La misma encuesta arroja resultados que confirman lo que se dijo en el párrafo anterior; para los jóvenes, la familia, los médicos y la escuela son las instituciones que mayor confianza les merecen. Por el contrario en quienes menos depositan su confianza son los partidos políticos, los diputados federales y la policía.

Estos desapegos por los políticos y la policía tienen su explicación. En el primer caso, los jóvenes han sido testigos de cómo actúan quienes son los representantes populares y quienes ocupan los puestos principales en las estructuras de los partidos políticos. En el segundo,

porque este núcleo poblacional padece, con rigor especial, la inseguridad de la ciudad y percibe el déficit de responsabilidad de quienes integran las instituciones encargadas de dar protección y seguridad. Por ésta y otras razones, son estos jóvenes los que, en algunos casos, llegan a cuestionar la democracia, en la medida en que creen que ella no salvaguarda los derechos humanos y políticos y dudan de que sea el mecanismo que les permitirá alcanzar su bienestar. En atención a estas expresiones, José Woldenberg advierte que "si las generaciones jóvenes no ven que el régimen democrático sirve para atender las necesidades y para que pueda darse una mejora en términos materiales, habrá cada vez un mayor desencanto".¹¹

Nada despreciable es entonces el hecho de que el 54.6% de los jóvenes encuestados -poco más de la mitad- considere que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero alarmante que el 46% -casi la otra mitad- no sostenga lo mismo. Estando así las cosas, no es aceptable dejar que permanezcan como son; actores políticos e instituciones deben entrar en un proceso de revaloración de sus actos y de sus prácticas, porque si el prestigio de la política y el deterioro de la seguridad continúan cuesta abajo, entonces los efectos se harán sentir más negativamente en la percepción de los jóvenes, pero sobre todo en sus conductas futuras. Asimismo, es preciso que la escuela, la familia y la sociedad en general, apelemos a la formación de valores y principios éticos y a la construcción de cierto sentido de moral en la vida pública.

3 Propuestas de políticas para los jóvenes

El diagnóstico que se ha presentado sobre la situación juvenil en el país no pretende dar cuenta puntual de las condiciones en las que viven los jóvenes, ni proporcionar soluciones fáciles a un problema, en sí mismo complejo. Pero sí insistir en que para poder generar respuestas, alternativas, soluciones, oportunidades, perspectivas y bienestar a este sector de la población se requiere no sólo

de la atención y concurrencia de los diferentes niveles del poder público, sino también de los mismos jóvenes y de los distintos organismos de la sociedad civil, incluyendo a los empresarios.

La próxima Legislatura estará obligada a atender ese problema tan complejo. Pero no tiene mucho tiempo. Ahí, en la Cámara de Diputados, la comisión que estudiará el tema, deberá preguntarse si la ley que creó al Instituto Mexicano de la Juventud sigue siendo la adecuada para la realidad que vive el país. Si lo que ha hecho hasta ahora -y todo está documentado- es lo que debe seguir haciendo en el futuro inmediato. Si sus relaciones con otras instancias de gobierno han sido productivas y siguen siendo las adecuadas. En otros términos, deberá evaluar la institucionalidad y los programas y políticas que se pusieron en marcha a lo largo del sexenio anterior y lo que va del actual.

Va a tener mucho trabajo esa comisión, porque evaluar lo hecho no tendrá mayor complicación, pero los problemas se le presentarán a la hora de la elaboración programática. En el momento de establecer las directrices y orientaciones para poner en acto políticas que supervisen que las diferentes instancias de gobierno que deben atender a la juventud mexicana cumplan con lo que la ley manda y asuman compromisos reales, de cumplimiento, respecto de las políticas a desarrollar. Ahí van a aparecer obstáculos reales porque los jefes de los más altos niveles de gobierno no aceptan compromisos más que hacia arriba. Y en ocasiones ni eso, como se puede documentar.

Esa comisión no va a tener demasiado tiempo. Sobre todo porque al país le urge contar con políticas de juventud que puedan llegar a ponerse en acto. Las crisis que se superponen, la económica que incluye el desempleo creciente, la sanitaria que exige soluciones e inversiones mediatas e inmediatas y la de seguridad que se sufre a diario, complican en mucho las cosas. Pero a todo ello habrá que hacerle frente.

En tal virtud conviene puntualizar algunas ideas y sugerencias que pueden ser relevantes y estratégicas en el tratamiento del asunto juvenil. Se trata de continuar

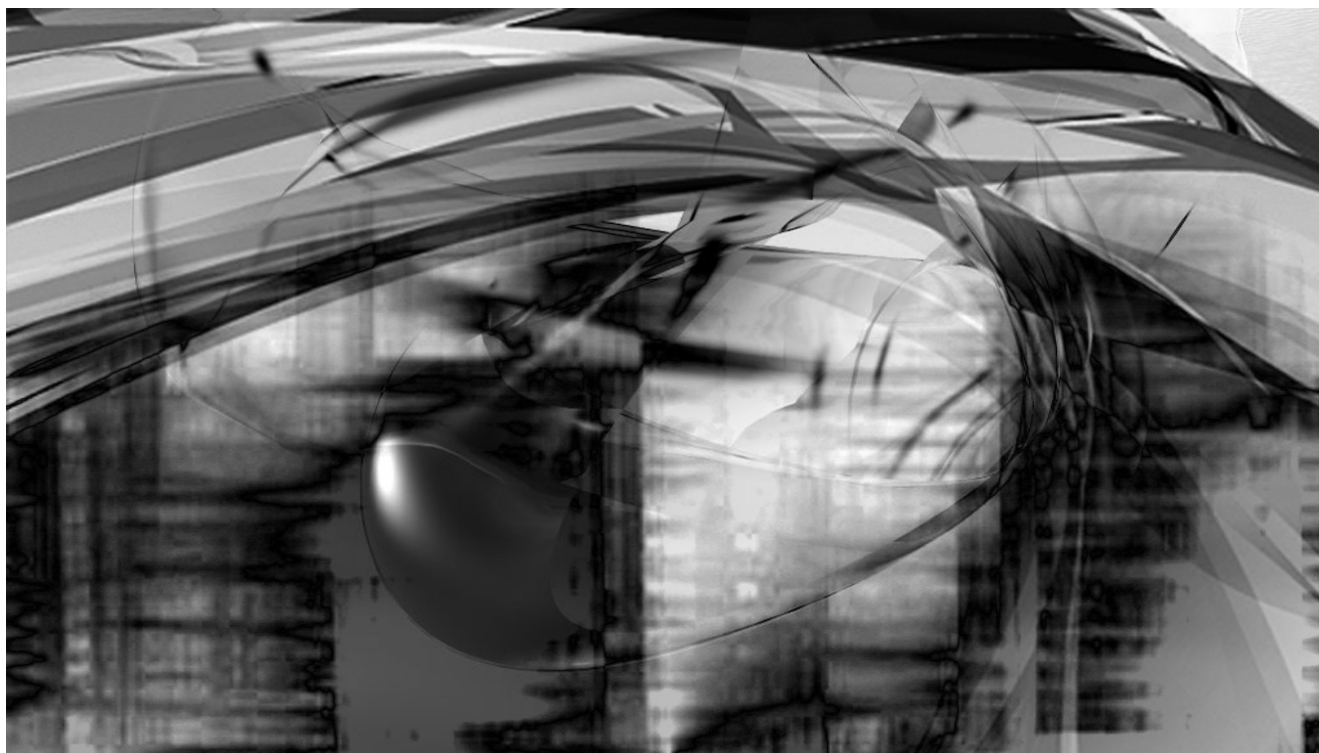
un debate -que no ha logrado todavía acceder con el rigor y la fuerza que requiere- por lo menos en materia de políticas y acciones coordinadas, tanto en los medios de comunicación, como en la voluntad política de los poderes ejecutivo y legislativo:

- En América Latina, una forma de combatir, entre otras cosas, la desigualdad en el aprovechamiento escolar en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay consiste en la provisión de recursos para que la calidad de la educación pueda igualarse en las distintas escuelas.¹²

- Sin embargo, el propio PNUD no es muy optimista sobre las posibilidades de disminuir la desigualdad en virtud de que la región deberá enfrentarse a varios desafíos, esto es, "en los próximos años pueden presentarse dos obstáculos para la disminución de la desigualdad. En primer lugar, si bien ha mejorado la cantidad de la instrucción, las personas que disponen de mayores ingresos siguen teniendo condiciones más favorables para acceder a educación superior de calidad y aquéllas que tienen menos recursos enfrentarán más dificultades para cursar estudios universitarios; en segundo lugar, aunque se ha observado una mejora en la incidencia del gasto social, una parte significativa de las erogaciones del Estado, aún puede ser considerada neutral o regresiva. También habrá que evaluar el impacto de largo plazo de la crisis global que se inició en 2008, que ya ha causado aumentos de la pobreza y la desigualdad en algunos países."¹³ En otras palabras, tal parece que, en materia de educación superior, la desigualdad tenderá a mantenerse, incluso a ampliarse, sin que una mayor erogación del Estado en gasto social garantice disminuir la brecha.

- En lo que respecta a México, la dinámica poblacional de México indica que la fuente más importante de las necesidades que se deben atender para alcanzar el desarrollo agrícola, industrial, científico, tecnológico y cultural radica en reconocer que los jóvenes constituyen la mayoría de la población. Lo anterior es importante porque señala que la atención a los jóvenes representa un componente fundamental de

- cualquier estrategia de desarrollo y de los programas que para su realización se diseñen.
- En estricta lógica el Estado Mexicano debería contar con grandes definiciones, cuyo obligado punto de partida sea el reconocimiento de que los jóvenes son el ámbito donde es posible incidir de manera determinante para proyectar el desarrollo nacional. Todos los problemas tienen un cruce obligado con el problema juvenil, ya sea que se trate de la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la industria, la agricultura, los servicios, la pobreza, la marginalidad y otros que sería excesivo enumerar.
 - El hecho de que los jóvenes sean el sector más numeroso de la población exige al Estado y a la sociedad destinar recursos para ser invertidos en ellos, en la perspectiva de una alta rentabilidad nacional. Esto obliga a pensar en planes ambiciosos, incluyentes, serios, consistentes, de larga permanencia y continuidad, que trasciendan los períodos sexenales.
 - La instrumentación de la política juvenil no debe suponer la centralización de sus planes; por el contrario, deberá instalarse en los terrenos de las políticas regionales, estatales y municipales para que tenga un verdadero carácter nacional.
 - En la actual estructura del aparato de la administración federal no es posible atender articuladamente los elementos antes mencionados, ya que muchas de las prácticas oficiales se realizan sin coordinación y en forma parcial e insuficiente. Se deben identificar adecuadamente las tareas que correspondan a cada área y establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional que supervise y evalúe las políticas aplicadas; es aquí donde el Instituto Mexicano de la Juventud cumpliría funciones y acciones importantes.
 - Quizá haya llegado a su maduración el momento de superar el ancestral tabú que ha prolongado el divorcio de las instituciones educativas y los sectores productivos. Nada más saludable que un acercamiento de las autoridades, las instituciones de educación superior y de las empresas para establecer compromisos y generar sinergias para emprender planes comunes, de los cuales no pueden quedar excluidos los jóvenes. Las becas-trabajo, la capacitación para la adquisición de nuevas competencias, entre otros aspectos, pueden ser algunas de las aportaciones de las empresas a las políticas a favor de la juventud. A su vez, ellas tendrían acceso a los beneficios de la investigación científica



- y tecnológica de las instituciones educativas, mismas que podrían recibir recursos del sector productivo. El gobierno, por su parte, haría su contribución con estímulos a las empresas y, a cambio, recibiría el apoyo de las instituciones y las empresas para la solución de los problemas del país.
- En la tarea común de aplicar políticas de apoyo a los jóvenes bien pueden involucrarse a los colegios de profesionistas, fundaciones, agrupaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, e incluso a las propias iglesias.
 - Es fundamental diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud específicos y profesionalizados en jóvenes que impliquen las áreas de sexualidad, alimentación, abuso de alcohol y drogas, así como los temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social. Junto con ello es importante garantizar plenamente los derechos que las jóvenes tienen para decidir en torno a las cuestiones de uso responsable de su sexualidad y de reproducción. Como se expone en el informe del PNUD, "los análisis que abordan el problema del embarazo adolescente sugieren la existencia de un amplio espacio para la política pública. Este fenómeno podría disminuir en gran medida mediante políticas orientadas a promover la educación (incluyendo la educación sexual), la salud (provisión de servicios de salud sexual y reproductiva) y las oportunidades para que las adolescentes realicen actividades acordes con su edad y sus intereses, ...[contemplando] la plena participación de sus beneficiarios a fin de establecer con mayor precisión cuáles son sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, para lograr de este modo una mayor eficacia"¹⁴
 - Alentar en las instituciones públicas y políticas del país, así como en los medios de comunicación, la promoción y defensa de los derechos juveniles, superando los prejuicios y estereotipos en torno a los jóvenes que por su condición de pobreza y marginación se vinculan a redes de violencia y delincuencia. Para lo cual se necesitan verdaderos programas de reinserción y desarrollo social. Asimismo, se debe fomentar

el acceso de los jóvenes a la justicia para combatir los niveles de violencia y apoyar el desarrollo de una cultura a favor de los derechos humanos y de la resolución de conflictos mediante el diálogo y los valores democráticos.

- Construir los espacios adecuados y las condiciones básicas para fomentar el diálogo y la participación juvenil, donde se respeten las diversas manifestaciones y expresiones culturales; así como se fomenten su difusión y su integralidad.

Bibliografía

- 1 Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, PNUD.
- 2 *Ibid.*, p.25. Aunque el mismo trabajo apunta que en los años previos a la crisis 2008-2009 la pobreza se redujo, y en un número importante de países también disminuyó ligeramente la desigualdad, debido al crecimiento y a la mejor incidencia del gasto social, sin embargo, no es claro que la tendencia decreciente de la desigualdad sea sostenible en el tiempo.
- 3 *Ibid.*, p. 72
- 4 *Ibid.*, p.62
- 5 *Ibid.*, p. 73
- 6 *Ibid.*, p.77
- 7 De acuerdo con el estudio citado del PNUD, el número de nacimientos promedio por cada 1000 habitantes en ALC es de 80, siendo la segunda región a nivel mundial que presenta la mayor tasa de embarazo adolescente, antecedida sólo por África. México se encuentra por encima de este promedio con 82 embarazos. *Ibid.*, p. 68
- 8 Ernesto Camacho y Rafael Cordera. "Jóvenes y educación cívica", en *Revista Trabajo Social*, México, UNAM, 2003, n. 7, julio 2003, p. 15.
- 9 José Antonio Pérez Islas. "10 mitos y realidades sobre la participación juvenil", en *Revista Trabajo Social*, México, UNAM, 2003, n. 7, julio 2003, p. 18.
- 10 Julia Flores (Coord.). *Jóvenes Mexicanos del siglo XXI. Encuesta Nacional de Juventud 2000, Distrito Federal, México, SEP-IMJ, 2004, p.63.*
- 11 Entrevista a José Woldenberg en *Revista Trabajo Social, Op. Cit.*, pp. 44-47.
- 12 PNUD. *Op. Cit.*, p.74
- 13 *Ibid.*, p.29
- 14 PNUD. *Op. Cit.*, p. 70